

La Iglesia católica chilena: Un actor político clave

A través de sus obispos, desarrolló unidad de propósitos y una capacidad de acción que le permitió defender la dignidad humana y apoyar la transición a la democracia, en un rol mediador que no se vio en otras iglesias del continente.

ANDREA BOTTO

Profesora e investigadora Universidad Finis Terrae

Ante la pregunta sobre la reacción de la Iglesia católica chilena frente al quiebre de la democracia en 1973, debemos comenzar por distinguir a la institución —compuesta por su jerarquía y de la cual emana una voz «oficial»—, del mundo católico en general, conformado por múltiples actores que abarcan desde el clero hasta los laicos diseminados en formas semi autónomas y con rumbos —a veces— divergentes, realidad que es imposible atomizar y reducir a una reacción consensuada y homogénea. Para efectos de estas páginas, nos centramos en las actuaciones y posiciones de la jerarquía de la Iglesia chilena, representada a través de la Conferencia Episcopal, la que, a pesar de sus diferencias internas, tuvo un discurso formal que le dio persistencia a su actuar, que posibilita llegar a ciertas conclusiones respecto a sus prioridades en un contexto tan complejo para Chile.

Por lo anterior, el foco aquí no está en las divergencias y las controversias suscitadas al interior del catolicismo chileno de esos años, sino en aquellos elementos que le

dieron continuidad. En orden a ayudar a una comprensión más vasta sobre el papel que tuvo la Iglesia católica en el momento político que convoca a estas páginas, divido el texto a partir de dos premisas que, creo, pueden contribuir a la reflexión sobre el tema.

Modernización del catolicismo a mediados del siglo xx

Una primera premisa que considero muy importante es la profunda deliberación y modernización ocurrida al interior del catolicismo chileno, sobre todo a partir de mediados del siglo pasado, y que permite vislumbrar el importante rol político que la Iglesia jugó en aquella época.

Sin duda, la Iglesia chilena se consagró como una de las más vanguardistas de América Latina, característica que se profundizó en el contexto de los años sesenta —marcados por el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín—, donde demostró su madurez teológica y su alineamiento con los nuevos requerimientos eclesiales y pastorales centrados decididamente en los más

pobres. Este nuevo énfasis agudizó las diferencias entre los católicos que venían desde hacía algunas décadas y que se tradujo, en términos simples, en la aparición de dos maneras de entender el catolicismo: una corriente tradicionalista, defensora de una praxis más espiritual y conservadora; y otra corriente reconocidamente más progresista, comprometida activamente en lo social y más dispuesta a involucrarse en las dinámicas democráticas y de injerencias estructuralistas en boga. Entre los variados factores que distanciaron a estas dos posturas estuvo la necesidad de tomar posición frente al comunismo, sobre todo en el contexto de Guerra Fría. El problema radicó en que parte de ese catolicismo progresista comenzó a encontrar coincidencias de objetivos con las ideas socialistas, sobre todo en relación con los métodos para superar la injusticia social y la marginalidad.

Continuando con la premisa, pienso que ese intenso «aggiornamiento» de la Iglesia chilena, tanto teológicamente como en sus métodos pastorales, la dejó mejor preparada, quizás más que ninguna en el continente, para enfrentar las graves divergencias que se comenzaron a suscitar en su interior a fines de los sesenta y comienzos de los setenta. Un punto que hay que destacar es que, a pesar de que hubo posiciones diversas ante la «vía chilena al socialismo» propuesta por el gobierno de Allende, las relaciones de la jerarquía con este fueron cordiales y gran parte del catolicismo chileno se mantuvo alineado con las posturas de sus pastores, definidas en varios documentos del Episcopado. Entre estos textos destaca: «Chile, voluntad

tad de ser», de 1968, en el cual se reitera su opción preferencial por los más pobres y su consonancia con los cambios estructurales, puntos coincidentes con algunas partes del programa de Allende, lo cual puede ayudar a explicar las buenas relaciones entre ambos.

El gran fenómeno eclesial de la era recién descrita fue la evidente politización de la Iglesia, algo que sin duda no es nuevo, pero que se acrecienta a través de la intervención activa de actores eclesiásticos en el espacio público, en lo que se traduce como una evidente secularización del catolicismo, entendido ahora como una herramienta de transformaciones del espacio temporal. El catolicismo, sin perder su dimensión trascendente, priorizó incentivar a sus fieles a comprometerse activamente en la transformación positiva y justa de la sociedad civil, desde una dimensión religiosa. El marcado compromiso político de algunos sectores católicos y el desplazamiento hacia la izquierda de parte de estos fue coadyuvado también por una praxis eclesiástica que comenzó a ocupar nuevos espacios, sobre todo entre la juventud y entre el mundo obrero. Sin embargo, a pesar de las buenas relaciones entre Iglesia y gobierno, durante la Unidad Popular se fue haciendo cada vez más difícil para la jerarquía empatizar sus planteamientos reformistas sociales con los de los sectores radicalizados del catolicismo, lo que comprometió de sobre manera la ya difícil cohesión de la Iglesia. Por otra parte, el problema de la politización del clero se agudizó, sobre todo tras la conformación de un nuevo grupo contestatario, los Cristianos por el Socialismo (1971) que, siguiendo los postulados de la Teología de la Liberación, cuestionaron abiertamente el modelo de la Iglesia, lo que terminaría por complicar aún más los precarios equilibrios al interior del clero chileno.

Si bien cierta historiografía ha acusado de «tibias» las reacciones de

la Iglesia frente a los flancos abiertos durante el período de gobierno de la UP, las fuentes consignan que, pese a la diversidad de opiniones existentes al interior del episcopado, prevaleció entre la jerarquía un discurso de unidad en conjunto con una estrategia de diplomacia y de cautela en las relaciones con el gobierno. La prioridad de la Iglesia estuvo en mantener su discurso social y su método pastoral de trabajo con el mundo obrero a través de las comunidades de base, a la vez que buscaba medios (sobre todo, a través de declaraciones oficiales de la Conferencia Episcopal) para diferenciar su mensaje y su estrategia de las del marxismo.

Una voz homogénea

De lo anterior deriva la segunda premisa, que plantea la capacidad de la Iglesia chilena para mantener una voz homogénea cuando las circunstancias lo requirieron, a pesar de su evidente politización y, sobre todo ante la marcada polarización de los sectores políticos. Afirmada en el candente espíritu progresista por el cual había optado en los sesenta, la Iglesia chilena logró perseverar no solo en su diálogo con el gobierno de Allende, sino también declarar sus directrices pastorales y sus opiniones sobre la contingencia en forma consensuada, a pesar de las disrupciones internas. Y ello también puede sostenerse para el complejo período del Gobierno Militar, cuando el desafío de la defensa de los derechos humanos enfrentó a la Iglesia con el régimen y provocó también fuertes divergencias al interior de los sectores católicos, algunos de los cuales interpretaron las críticas a la dictadura como una franca intromisión de la Iglesia en política. Lo cierto es que la voz de la jerarquía fue unánime en las críticas ante las violaciones de las libertades y la represión, con actuaciones concretas que se manifestaron tempranamente con la creación del

Comité Pro Paz (1973) y, luego de la Vicaría de la Solidaridad (1976). También constituyeron ejemplos sólidos del acuerdo eclesiástico en estas materias las numerosas declaraciones de la Conferencia Episcopal chilena —siempre señaladas como «consensuadas»— y de las también numerosas cartas pastorales publicadas por los obispos del período.

La reacción tras el golpe

Es cierto que la historiografía ha hecho hincapié en la ambigüedad de la posición de los obispos ante el golpe mismo; efectivamente, la carta pastoral «La reconciliación en Chile» se publicó seis meses después —en 1974— y fue bastante vaga en sus posturas. El texto no reflejó de ninguna manera las posiciones políticas de los obispos, aunque cabe señalar que el concepto de «reconciliación», reiterado por la jerarquía a lo largo de todo el período, se comenzó a usar a partir de este documento. Hay quienes quieren ver aquí la primera crítica oficial de la Iglesia a la dictadura, pero pienso que su tono excesivamente cauto y reservado no permite llegar a esas conclusiones. Es más, en términos generales, de las primeras reacciones de los obispos en torno al golpe militar puede interpretarse un cierto respaldo moral al nuevo régimen. La posición ambigua de la Iglesia chilena en los inicios de la dictadura no contradice la premisa sugerida, ya que testimonios y fuentes coinciden en que las posiciones de la jerarquía no estaban claras con respecto al golpe, pues varios obispos estaban escandalizados con los rumbos que había tomado parte de la Iglesia chilena durante la Unidad Popular, y otros tantos veían la intervención militar como una salvación para el país y no pocos confiaron en que el gobierno de la Junta sería transitorio. Por lo tanto, era muy complicado establecer una posición «oficial» tan tempranamente ante los hechos y se prefirió actuar con cautela.

Lo que es sí es evidente desde los inicios de la dictadura es que la Iglesia asumió una posición de cobijo y de defensa de quienes comenzaron a ser perseguidos por el régimen, actitud que no abandonaría nunca durante el Gobierno Militar y que se convirtió en su prioridad fundamental.

Derechos humanos y retorno a la democracia

Durante la compleja época de la dictadura se pueden evidenciar dos momentos: el primero entre 1973 y 1983, caracterizado en términos generales por una reacción de prudencia por parte de la jerarquía ante el régimen militar en sí, pero cuya prioridad fue la activa defensa de los derechos humanos encarnada sobre todo en la Vicaría de la Solidaridad que, según un extendido consenso, se convirtió en la punta de lanza eclesiástica contra el gobierno militar. Durante este período y hasta su retiro, el entonces arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez se enfrentó directamente a la dictadura con asombrosa valentía, asumiendo la defensa de los perseguidos, aunque sin involucrar políticamente a la Iglesia.

El segundo período abarca desde 1983 —en que se producen las primeras protestas nacionales en contra del régimen y, también, se realizan nuevos nombramientos eclesiásticos—, y el fin de la dictadura con el plebiscito de 1988 y las elecciones democráticas de 1989. Estos años se caracterizan por una creciente enemistad entre la Iglesia y el Gobierno Militar, en la medida en que esta perseveró en su defensa de los derechos humanos y en las críticas a la represión, y en que el gobierno agudizó su campaña estratégica para desestimular a la Iglesia, acusándola constantemente de intervención en la política contingente. Quizás lo más relevante del discurso de la jerarquía en este período estuvo en que, sin abandonar su defensa de los derechos humanos, sumó una nueva

prioridad a su actuación pública: el retorno de la democracia en Chile.

Más allá de los episodios e hitos específicos que marcaron el devenir de la Iglesia entre 1973 y el fin de la dictadura, lo que se quiere recalcar aquí es la continuidad en el discurso eclesiástico, pues la Iglesia se convirtió en la única institución opuesta al régimen con capacidad de criticarlo abiertamente y de denunciar la represión, con lo cual asumió directamente un rol activo en la política contingente. Es cierto que hemos mencionado con anterioridad la politización de la Iglesia, sobre todo el contexto de los años sesenta, pero debe tenerse en cuenta que dicha politización incomodaba a la jerarquía, la cual luchó de diversas maneras para evitarla. Sin embargo, bajo la dictadura militar y, sobre todo a partir de la publicación en 1982 de la Carta Pastoral «El renacer de Chile» —que contiene una crítica directa al sistema económico implementado por la Junta y constituye el primer llamado formal de la Iglesia para el retorno de la democracia—, la Iglesia se comprometió definitivamente no solo con las denuncias contra el gobierno, sino también con un proyecto político democrático alternativo al régimen.

El Acuerdo Nacional por la Democracia

Como se ha señalado, 1983 constituye un año de suma importancia en este relato, pues aquí comienza una nueva etapa en las relaciones entre el Gobierno Militar y la Iglesia. En mayo se produjo la primera jornada de protesta nacional, como consecuencia de la dura crisis económica. También hubo nuevos nombramientos de obispos en las tres sedes más importantes del país: Valparaíso, Santiago y Concepción. En Santiago se nombró como arzobispo a Juan Francisco Fresno, pronto creado cardenal por el papa Juan Pablo II. Es imprescindible detenerse brevemente en la figura de Fresno,

Ante el contexto de censura y de represión y de una sociedad civil prácticamente inactiva, la Iglesia aprovechó los mecanismos a su disposición para apelar a la opinión pública y así deslegitimar al Gobierno Militar.

quién fue un actor de suma relevancia en las posturas que asumió la Iglesia desde entonces, encabezando el llamado a la transición hacia la democracia.

El nuevo arzobispo tenía fama de ser teológica y políticamente conservador; incluso fue uno de los seis obispos (de un total de cuarenta) que apoyó el golpe de septiembre de 1973. Tras su nombramiento en el cargo, muchos interpretaron que ello se traducía en un giro de la Iglesia hacia posturas más conservadoras, menos politizadas y más dialogantes

Monseñor Juan Francisco Fresno, el cardenal que fue clave en la transición de Chile a la democracia.

© Fundación de Documentación y Archivo Vicaría de la Solidaridad (FUNVISOL).



con el régimen militar. Es cierto que Fresno trató de disciplinar al clero y tranquilizar a los militares a través de ciertas medidas consideradas «conciliatorias». Sin embargo, se tiende a subestimar no solo las excelentes habilidades que tuvo el arzobispo como negociador y mediador, sino también el activo rol que tuvo en el retorno de la democracia. Contrario a las interpretaciones del gobierno, Fresno no solo continuó con la labor de Silva Henríquez en la Vicaría de la Solidaridad, sino que también hizo suya la exigencia de la normalización institucional del país. Ello dio excusas al gobierno para desarrollar estrategias con el fin de dividir a la Iglesia, dañando su imagen en el Vaticano y entre los fieles católicos chilenos, al acusarla por todos los medios de abierta intervención política. La Iglesia, a través de sus obispos, se defendió constantemente argumentando el derecho a alzar la voz cuando los valores fundamentales de la sociedad estaban amenazados.

En el caso chileno, ante el contexto de censura y de represión y de una sociedad civil prácticamente inactiva, la Iglesia aprovechó los mecanismos a su disposición (cartas pastorales, declaraciones del Episcopado, homilías, entre otros) para apelar a la opinión pública y así deslegitimar al Gobierno Militar. Ello fue en parte posible por el temprano *aggiornamiento* de su Iglesia, el prestigio intelectual y moral de sus obispos, y su solidez institucional.

El cardenal Fresno fue el principal gestor del *Acuerdo Nacional para la transición a la plena democracia* de 1985, quizás el evento más fundamental del período y el que posibilitó en cierta medida el plebiscito de 1988. El *Acuerdo* marcó un hito porque unió a la jerarquía en torno a una causa común (sin descuidar por ello la defensa de los derechos humanos), defendida y difundida prácticamente desde todos los púlpitos, y aunó a los sectores democráticos para alzar una voz mancomunada sobre la exigencia

del retorno de la institucionalidad democrática. Con el *Acuerdo*, Fresno se echó al gobierno encima definitivamente, pero, a su vez, tuvo la ventaja de que casi todos en el Vaticano estaban a favor de la democracia, y que el Gobierno Militar había ido perdiendo adeptos por esos lados. Sin duda se debe resaltar en este contexto el gran poder moral de negociación desarrollado por el arzobispo, infravalorado por la historiografía, y el hecho de que el llamado de la Iglesia a emprender la transición constituyó uno de los éxitos más grandes de la Iglesia chilena¹.

Así, en una mirada de larga duración, puede constatarse que, una vez ocurrido el quiebre de la democracia en 1973, un importante sector del catolicismo chileno fue capaz de levantar una bandera unida, a pesar de sus tensiones internas, por la defensa de la dignidad humana y de los valores que creía violentados por las acciones de la dictadura. En este sentido, la Iglesia chilena, a través de sus obispos, logró desarrollar una unidad de propósitos, establecer canales de comunicación con la opinión pública, y desarrollar una capacidad de diálogo y de negociación con la dictadura que, superando enormes dificultades, tuvo como consecuencia directa la transición a la democracia. Esta capacidad de iniciativa y el importante rol como mediadora no se vio en otras iglesias del continente; por ejemplo, en el caso argentino, el catolicismo no logró unir posiciones en torno a la dictadura, y existe cierto consenso de que la Conferencia Episcopal argentina, un actor clave en términos políticos, pudo haber hecho mucho más por defender los derechos humanos en ese país.

Las otras prioridades en los años noventa

Para concluir quisiera recalcar un par de ideas sobre la vida de la Iglesia durante el Gobierno Militar. En primer lugar, el rol activo que

Una vez ocurrido el quiebre de la democracia en 1973, un importante sector del catolicismo chileno fue capaz de levantar una bandera unida, a pesar de sus tensiones internas, por la defensa de la dignidad humana.

esta asumió políticamente en la defensa de los derechos humanos y, luego, para promover el retorno a la democracia. Es cierto que la Iglesia chilena había sido un actor clave en el espacio público, pero este rol político se acrecentó a partir de 1983 cuando encabezó los llamados hacia la reconciliación y transición a la democracia, sobre todo a través de la promoción del Acuerdo Nacional.

Sin embargo, esta unidad de propósitos y este rol político activo de los obispos chilenos va a decaer tras la realización del plebiscito de 1988. Es cierto que los obispos hicieron llamados para que los chilenos se inscribieran en los registros electorales y votaran sin miedo, pero, en términos generales, no hicieron pública su posición política. Aquí podría decirse que terminó la vida políticamente activa de la Iglesia chilena ya que, en los años noventa, las prioridades cambiaron por una nueva preocupación por temas morales, como el divorcio, el aborto, la educación sexual de la juventud, etc. Puede afirmarse entonces que la Iglesia actuó con mucha coherencia en el ámbito político en el período señalado, pero cuando la sociedad civil recuperó su papel activo, la Iglesia comenzó su paulatina retirada de la política contingente. /M

¹ Otro hito importante hacia el final del período aquí estudiado fue la visita del papa Juan Pablo II a Chile en abril de 1987 pues, entre sus muchos significados, aunó nuevamente todos los esfuerzos no solo de la jerarquía sino de todo el mundo católico chileno. El contexto y las consecuencias de esa visita papal merecen un espacio mayor; no obstante, no estimo que se pueda argumentar fehacientemente que dicho evento haya tenido un impacto directo en el retorno a la democracia, aunque sí pueden interpretarse ciertos gestos de Juan Pablo II en este sentido: en su encuentro con representantes políticos (incluso del Partido Comunista) y de organizaciones sociales.